

LA ESTRUCTURA SOCIAL AGRARIA ARGENTINA EN EL LARGO PLAZO

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL AGRO ARGENTINO, DESDE SUS ORÍGENES HASTA NUESTROS DÍAS. LOS INTERESES MAYORITARIOS EN CADA ÉPOCA, LOS PRINCIPALES PROBLEMAS, LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y EL ROL DEL ESTADO. LAS POLÍTICAS PARA CADA MOMENTO Y LAS PERSPECTIVAS FUTURAS.



por
NOEMI M.
GIRBAL-BLACHA
*Doctora en Historia
por la UNLP **

(*) *Doctora Honoris Causa por l'Université de Pau et Pays de l'Adour (Francia). Conicet-CEAR /UNQ*

La Argentina es un país de casi tres millones de kilómetros cuadrados con una economía de origen pecuario (cueros, sebo, tasajo) hasta promediar el siglo XIX, siendo su máxima expresión corporativa la Sociedad Rural Argentina, creada en 1866 para representar los altos intereses ganaderos. Hacia fines de esa centuria se convierte en una nación agroexportadora, receptora de inmigración masiva y capital externo, donde la posesión de la tierra otorga poder político y es símbolo de prestigio social; gobernada por una elite de “liberales en lo económico pero conservadores en lo político”. Su identidad, construida mirando a Europa y de espaldas al pasado aborigen, encuentra entonces su etapa de consolidación. Una vez resuelta, en 1880, la federalización de Buenos Aires, se organiza el poder político basado en una “alianza de notables” que expresa la suma de algunas voluntades provinciales y organiza una estructura política de alcance nacional. Se inaugura la etapa de la “paz y administración” que se esfuerza por legalizar el poder y pacificar el país, para transformar los perfiles criollos de la Argentina “gran aldea”. Los sectores terratenientes del litoral conjugan sus intereses con los de los inversores, exportadores, importadores y agroindustriales del interior para hacer posible la Argentina del “progreso indefinido”, pero desigual.

La estadística expresa el *boom* de “la revolución en las pampas” y “el progreso argentino” en coexistencia con la consolidación del régimen de arrendamientos, la falta de crédito agrícola, el monopolio de la mecanización rural y una comercialización cerealera concentrada y dependiente de consignatarios, acopiadores y grandes exportadores (Bunge y Born, Dreyfus y Cía., O. Bemberg y Huni Wormser). Los efectos de la política oligárquica y la coyuntura financiera internacional conducen al “apogeo y crisis del liberalismo” hacia 1890, cuando se desata la crisis monetaria y fiscal que, unida a la inestabilidad política, derivan en el primer llamado de atención para el modelo implementado por estos hombres de la Generación del 80. Los conflictos agrarios cobrarán envergadura con el inicio del siglo XX y en 1912, luego de los efectos del “Grito de Alcorta” (Santa Fe), se crea la Federación Agraria Argentina como expresión de los arrendatarios rurales de la región cerealera.

En la década de 1960, los representantes de los grandes productores rurales acusan a la política peronista de la descapitalización del agro y su estancamiento, ignorando los ventajosos créditos recibidos.

La posguerra también dejará sentir sus efectos cuando criadores e invernadores ganaderos deban afrontar los bajos precios que los frigoríficos de capital estadounidense y británico pretenden pagar por el ganado mestizado y que terminarán por mostrar el poder del capital externo cuando en 1924 la legislación que procura sostener los precios a favor de los criadores deba ser derogada.

La crisis de 1929 afecta a todo el mundo occidental. En la Argentina coincide con el fin del paradigma del crecimiento hacia afuera. Los efectos económico-financieros se expresan también en alteraciones en la escala de valores vigentes (ahorro, propiedad, orden) y en la mentalidad colectiva. Crisis de identidad, de dependencia, de distribución, de participación y de legitimidad del poder político se conjugan para dar cuenta de la necesidad de cambios, mientras se activan los nacionalismos económicos en el mundo. Se realinea el mercado internacional y se fortalece el bilateralismo, las políticas deflacionistas persiguen la liquidación de *stocks*, los precios de los productos primarios se desploman, la desocupación se generaliza, se activa la polarización social y el Estado liberal entra en crisis.

La máxima inflexión de la crisis en la Argentina ocurre en 1932. Se anuncia la presencia del Estado keynesiano (1936) con su papel inductor, mientras el empirismo del New Deal de Roosevelt innova el ambiente liberal estadounidense, para reactivar la economía mediante el aumento de la demanda y el estímulo de la deflación bajo la regulación estatal. En un país receptivo a los cambios de precios en el mercado mundial y a las variaciones en el comercio internacional, con poca capacidad de consumo interno, como ocurre en el caso argentino y otros de Latinoamérica, los mecanismos transmisores de la crisis internacional, el viraje proteccionista y el régimen de preferencia imperial británico impactan en el modelo agroexportador.

En la Argentina la implementación del control de cambios en 1931, las mutaciones políticas internas y la depreciación de la moneda acompañan la industrialización por sustitución de importacio-

Las grandes y tradicionales corporaciones como la Sociedad Rural Argentina, creada en 1866, saben de la importancia de sus orígenes y hacen uso del pasado a la hora de justificar sus reclamos ante el Estado.

nes, conjugándose con el bilateralismo comercial expresado en la firma del Tratado Roca-Runciman (1933) y el Acuerdo Anglo Argentino (1936). Se derrumba el sistema multilateral de comercio y pagos. La mayor flexibilidad del sistema monetario promueve la reforma bancaria de 1935 y se crean el Banco Central de la República Argentina –con capitales mixtos– para fijar la emisión monetaria y la tasa de interés, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, destinado a movilizar los activos fijos. El Estado avanza subsidiando a la economía agraria y crea, a partir de 1933, las Juntas Reguladoras (Granos, Carnes, Vinos, Yerba Mate, Azúcar, Algodón). Sostener los precios de los productos del agro, evitar ventas apresuradas por la desvalorización de la moneda, asegurar la rentabilidad del productor, son los propósitos esenciales de estas medidas. Los sectores rurales pampeanos se reorganizan corporativamente y se forman la CAP (Corporación Argentina de Productores de Carnes) y la CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa).

Pasado el primer trienio de los años '30 los precios de los cereales mejoran ante la sequía estadounidense. La economía argentina se recupera; pero nuevamente la sombra de la recesión se proyecta con el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Frente a un comercio mundial limitado y un creciente sector industrial, se busca restaurar la hegemonía agroexportadora. Esa intención se expresa en el Plan de Reactivación de la Economía Nacional presentado por el ministro Federico Pinedo ante el Senado de la Nación en 1940. Es el primer documento de Estado donde se procura modificar parcialmente la estrategia de desarrollo económico vigente, conciliando industrialización y economía abierta, fomentando el comercio con los Estados Unidos y promoviendo un mercado de capitales. La propuesta es tardía y vacilante, pero atiende al mercado interno y procura anticiparse a los efectos de la posguerra salvaguardando a los grandes productores agrarios. La confrontación política anula este desafío. El plan se frustra cuando no se aprueba en el Congreso nacional. La política impone sus reglas a las decisiones económicas.

En febrero de 2007 la ampliación de subsidios alcanzaría también –no obstante el discurso– a los sectores del agro. Una sustancial mejora en la refinanciación de los pasivos de unos 4.500 productores rurales y los ajustes en los precios de las carnes son una respuesta contundente desde el gobierno a los pedidos del campo.

En la posguerra las prósperas condiciones del país ante una coyuntura internacional que le resulta favorable –especialmente hasta 1949– promueven las reformas socioeconómicas emprendidas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y, desde 1946, por la gestión gubernativa de Juan Perón. Se favorece la redistribución del ingreso ante el diagnóstico efectuado por el Consejo Nacional de Posguerra. La propuesta de una “economía cerrada” –más discursiva que real– puesta al servicio de la “justicia social” surge de las condiciones de un país acreedor, pero también como parte de una decisión política del Estado dirigista, nacionalista y planificador, que pone la economía al servicio de amplios sectores de la sociedad. El mercado interno, fortalecido por una política económica incluyente, permite una nueva alianza de clases entre la pequeña y mediana burguesía industrial y los obreros, para convertirse en el eje de la planificación económica quinquenal de 1947.

La opción mercadointernista del peronismo va más allá de la sustitución de importaciones; controla precios, cuenta con un sistema financiero nacionalizado (desde 1946), mejoras sociales,

crédito destinado a la producción y un uso estratégico del sector agropecuario para dar impulso a la pequeña y mediana industria nacional, sin desamparar financieramente a los sectores económicos más tradicionales del país. Desde el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) la comercialización de los productos agrarios (monopolizada por este organismo autárquico desde 1946) permite promover la industria argentina liviana con recursos genuinos cuando la diferencia entre los altos precios internacionales agrícolas y los precios mínimos pagados al productor rural por el IAPI es derivada al sistema bancario nacionalizado y –a su vez– distribuido como crédito a la producción industrial y agroindustrial con bajas tasas de interés y largos plazos de reintegro.

Hacia 1950 la coyuntura mundial cambia y el plan quinquenal (1947-1951) sufre los efectos. La pendular “tercera posición” decae y el gobierno nacional recurre al capital externo. Queda al descubierto que “la financiación subsidiada permitió el surgimiento y la capitalización (¿sobrecapitalización?) de una clase empresaria nacional, pero sin duda fue incapaz de establecer un mecanismo permanente de financiación a largo plazo”. El campo como expresión de todos sus sectores se constituye nuevamente en la alternativa para la reorientación económica y para superar el deterioro en los términos del intercambio. Los proyectos de reforma agraria anunciados por el peronismo desde 1944 y durante la campaña electoral son una utopía. En su reemplazo se prolonga la política de suspensión de los desalojos de campos, manteniendo estables las propuestas del Estatuto del Peón (1944), mientras el IAPI revierte su función de fomento industrial para convertirse –mediante

Agronegocios, bicom bustibles, engorde de ganado a granos, cultivo de soja sobre rastrojo de maíz, mejora del trigo y el maíz en el norte del país, tanto como los cultivos asociados, son desafíos incluidos en la agenda pública del oficialismo hasta hoy.

un fuerte endeudamiento con el sistema bancario oficial— en un organismo de subsidio al sector rural en todo su espectro social (propietarios, terratenientes, arrendatarios, aparceros).

Dos malas cosechas consecutivas frustran las expectativas oficiales y en 1952 se produce el “*crack* del Estado de Bienestar”. La inflación acompaña a la economía argentina. Sin crédito internacional, “la Argentina sólo podía pagar sus importaciones a través de sus exportaciones de materias primas”; pero la producción agrícola aparece diezmada por la sequía y resulta difícil la importación de insumos para sostener la industria nacional. En 1952, el flamante segundo gobierno de Perón aparece jaqueado por la crisis. Pone en vigencia el Plan de Emergencia Económica, redoblando la apuesta de la “vuelta al campo”. La consigna gubernamental dirigida al conjunto de la sociedad argentina es: producir y ahorrar más, consumiendo menos.

El frágil equilibrio político acompaña la oscilante

economía del país al promediar la década de los '50. La sociedad argentina se fractura entre peronistas y antiperonistas más allá de la destitución de Juan Perón. Se busca la estabilización en los precios nominales en medio de un proceso inflacionario que no cede. Los sectores rurales se organizan ahora en Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Cooperativa Limitada). El Banco Central interviene para financiar el déficit fiscal. La CEPAL, en su explicación sobre el estancamiento económico de América latina, responsabiliza de ese efecto a la estructura de la propiedad de la tierra, reclamando el aumento de la producción agraria y el descenso en los costos de producción. Propone como herramienta el uso de la tecnología rural. En la década de 1960, los representantes de los grandes productores rurales acusan a la política peronista de la descapitalización del agro y su estancamiento, ignorando los ventajosos créditos recibidos.

La situación mundial durante los años de 1970 marca una nueva etapa crítica para países como la Argentina. Se frena drásticamente el crecimiento económico internacional y se emprende el ajuste para afrontar los reveses del sistema: el derrumbe del orden monetario de Bretton Woods, los bruscos incrementos en los precios de los energéticos desde los países de la OPEP y el abrupto ascenso de la inflación. Estas variables y los vaivenes de los mercados financieros mundiales inciden en los términos del intercambio, y obligan a cambiar los objetivos e instrumentos de la política económica en tiempos del Estado Burocrático Autoritario, desde 1966. En 1973, con el retorno del peronismo, el flujo de capitales hacia los países en desarrollo es creciente y fluido. Coexiste con una vertiginosa fuga de capitales nativos que opera como un factor importante a la hora de sostener un crecimiento en forma de créditos bancarios a tasas de interés flotantes que también alcanzan al agro. El sujeto agrario se desdobra y quienes son propietarios de la tierra no son necesariamente los dueños de la tecnología. La figura del contratista en el campo se afianza.

A una política monetaria y fiscal expansionista, aumentos salariales y controles de precios que caracterizan a la gestión peronista (1973-1975), le sucede desde marzo de 1976 el monetarismo friedmaniano. La “restauración ortodoxa” conduce a la devaluación. Los salarios reales se reducen y se incrementa el déficit gubernamental, mientras se abandonan los precios regulados, se suprimen los subsidios y se adopta una política monetaria restrictiva,

La Argentina rural parece distinguir jerárquica y definitivamente la agricultura familiar de los agronegocios a los cuales apuesta como uno de los pilares de su política económica, más allá del discurso.

bajan los aranceles, liberalizándose el control de cambios. El “proyecto industrialista” es demolido y se inaugura un proceso de profundos cambios en la estructura productiva junto a nuevos desequilibrios en las finanzas públicas y en el balance de pagos, generando mayor desigualdad social y deterioro laboral. La puja distributiva se acentúa y se localiza entre el sector de bienes y servicios y la actividad financiera. La economía entra en una recesión profunda, con fuertes obligaciones de intereses y retrasos en el pago de la deuda externa, mientras la crisis de hegemonía se hace más aguda.

La transnacionalización de la agricultura, el estilo tecnológico pampeano adoptado en las economías del interior y la exportación de alimentos por los países desarrollados modifican desde los años '70 las tradicionales características del mercado y estrangulan las posibilidades habituales de los países agropecuarios. Se suman a esta coyuntura la sofisticación financiera, con la desregulación institucional, y la persistencia de la inflación. La estabilización se asocia a los precios controlados y no al buen nivel de actividad económica. El agro, una vez más, toma un lugar central en la economía nacional. El sistema financiero diseñado en 1977 se acelera, la consolidación de las deudas empresarias y la liquidación de entidades financieras entre 1980-81 son sólo el principio de una solución precaria que el retorno a la democracia, en 1983, no podrá remontar fácilmente.

Desde la Primera Guerra Mundial los economistas dan cuenta de 16 ciclos recesivos en el país, con una duración que nunca supera los tres años. En el 2001, con la pesada herencia de un período recesivo profundo y un índice de desempleo del 23% (a diferencia del 8% registrado en los años '30), en “los espejos históricos de la crisis argentina” aparece –con los inicios de este siglo XXI– la imagen de una nación sumida en un deterioro profundo, en medio de una orfandad internacional, en default público y privado, con un sistema financiero quebrado y problemas institucionales. Era insuficiente pensar que con políticas ortodoxas la crisis podría superarse.

La competencia por la provisión de los mercados se acentúa. Nuestro país se ve obligado a ser creativo y aumentar la eficiencia agraria, mientras brega por reducir el proteccionismo internacional. Busca nuevamente el apoyo oficial, pero los tiempos han cambiado aun para los omnipresentes sectores rurales. Las grandes y tradicionales corporaciones como la Socie-

dad Rural Argentina, creada en 1866, saben de la importancia de sus orígenes y hacen uso del pasado a la hora de justificar sus reclamos ante el Estado, aunque su poderío haya disminuido por la importancia de los inversores extranjeros en nuestro medio rural. Ocurría en julio del 2006, cuando “el gobierno dejó sin funcionarios la inauguración de La Rural”, la exposición que anualmente se reúne en Palermo y que vivirá –entonces– una situación inédita en 120 años de la muestra. El Estado nacional, sin reprobar, dejaba expuesta su resistencia a los reclamos de este poderoso empresariado y explicitaba la tensión existente. Aunque el titular de la entidad, fiel al estilo corporativo, evitaba confrontar con el presidente Néstor Kirchner, apelaría –casi al final de sus palabras inaugurales– al diálogo. El discurso que leyó (de los dos que había llevado preparados) se iniciaba con largos párrafos dichos en 1875 en la primera Exposición Rural por un funcionario del por entonces presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda. Así, ponía de manifiesto la ausencia oficial y una situación inocultable: que en la Argentina, históricamente, el agro no podía ser omitido por el poder político, al menos no en silencio. Los números del campo indicaban que el 54,05% del área plantada y la mayor inversión por hectárea correspondían a la soja, seguida de lejos por el trigo (15,93%) y el maíz (14,08%). Una situación que se ha mantenido en el tiempo más allá de los conflictos.

En febrero de 2007 la ampliación de subsidios alcanzaría también –no obstante el discurso– a los sectores del agro. Una sustancial mejora en la refinanciación de los pasivos de unos 4.500 productores

rurales y los ajustes en los precios de las carnes son una respuesta contundente desde el gobierno a los pedidos del campo. Los productores insisten en los precios diferenciados que distingan entre la exportación y el mercado local. Las compensaciones estatales al sector se postulan como la salida más oportuna.

El pasado y el presente suelen mostrar continuidades, además de algunas fracturas. Uno de los ejemplos lo constituye el agro argentino, que da muestras irrefutables de las permanencias que el discurso, los gestos, las acciones y aun las imágenes registran, como parte de una misma ecuación en el concierto nacional vigente, aquella que vincula el agro y la política. El primero aparece enlazado en los últimos años a la sociedad del conocimiento, cuando –por ejemplo– el ingeniero agrónomo de Carlos Casares y uno de los mayores empresarios de la soja en tiempos de consolidación de la siembra directa, Gustavo Grobocopatel, que trabaja unas 110.000 hectáreas en la Argentina, Uruguay y Paraguay, resultara elegido por Harvard, en el 2007, como “uno de los casos de negocios del año”. Una decisión que resultaba producto de su vinculación a la tecnología de alto nivel.

A fines de ese año, por su parte, el gobierno de Cristina F. de Kirchner establece nuevas alícuotas en las retenciones a las exportaciones: 35% para la soja, 28% para el trigo y 25% para el maíz. Agronegocios, bicombustibles, engorde de ganado a granos, cultivo de soja sobre rastrojo de maíz, mejora del trigo y el maíz en el norte del país, tanto como los cultivos asociados, son desafíos incluidos en la agenda pública del oficialismo hasta hoy. La Argentina

rural parece distinguir jerárquica y definitivamente la agricultura familiar de los agronegocios a los cuales apuesta como uno de los pilares de su política económica, más allá del discurso. Las particularidades sectoriales en el campo argentino, acompañan esta evolución.

Hoy, cuando la soja pone en el tapete de las discusiones los beneficios y perjuicios de un cultivo que, concentrado en pocas manos desde los años '90, separa definitivamente a los dueños del suelo de los productores y exportadores, de espaldas a las repercusiones ambientales y ecológicas; cuando la ganadería argentina sufre con frecuencia el impacto de los cambios en la demanda externa y en la dieta de argentinos y extranjeros; cuando las inundaciones o sequías obligan a reorientar la producción agraria; cuando los bajos precios pagados por la producción lechera atrofian el sector, el campo de la mano de la tecnología sigue siendo una opción imprescindible para la economía nacional. Los pequeños y medianos agricultores, finalmente excluidos de algunos beneficios que planteara el proyecto corregido, que durante 2008 presentara el Ejecutivo nacional ante el Congreso de la Nación, y que culminara en la abortada resolución 125, coronó mayores retenciones a las exportaciones agrarias pero también desdoblado las cargas conforme al rango del productor. La soja se convertía en “la gran apuesta del año 2009” y también de los tiempos bicentenarios.

El desafío actual es entender la cuestión socioeconómica en perspectiva, cuando se piensa en la “bio” Argentina asociada a los combustibles, para poder caracterizar la complejidad del mundo agroeconómico, su heterogeneidad, con una creciente aproximación al quehacer científico-tecnológico como parte de sus negocios, pero también se deben rescatar sus continuidades y su coherencia para con las alianzas entre el agro, la industria asociada a él –que hoy profesionaliza la gestión– y los gobiernos de turno. Mientras tanto, el espectro social agrario se hace cada vez más heterogéneo y desigual. Así, se sostiene que “las posibilidades de supervivencia de los chacareros pampeanos están siendo seriamente amenazadas” como una forma de comprender la dislocación del espacio de pertenencia y la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación ante una estructura social agraria cada vez más compleja.